

Bogotá D.C, 11 de diciembre de 2025

Señores

JUECES DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C

E.S.D

REF: Acción de tutela con solicitud de medida provisional para la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, trabajo, igualdad, dignidad humana, confianza legítima y protección reforzada de menor de edad.

Accionantes: NUBIA ESPERANZA CORREDOR LAITON CC 1018415171 y SILVIA ROSA ORTIZ MARTINEZ CC 20441454

Accionadas: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, Alcaldía Local de San Cristóbal, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, Instituto para la Economía Social – IPES y CARVEPA S.A.S. (Contratista ejecutor de la obra).

I. SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL

Con fundamento en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, solicitamos respetuosamente al despacho acceder a la medida provisional ordenando la suspensión inmediata de la instalación, construcción, adecuación u ocupación de las casetas o módulos en el punto donde las accionantes ejercen su actividad comercial esto es en el lugar ubicado en Carrera 6 #20a-41 sur, Bogotá, barrio 20 de julio Localidad San Cristóbal Sur, hasta tanto se resuelva de fondo la presente acción de tutela.

Esta solicitud se formula debido a la configuración de un perjuicio irremediable, pues la intervención administrativa ya está en curso y de no suspenderse, consolidaría una afectación irreversible. Las accionantes dependen exclusivamente de esta actividad para garantizar su mínimo vital y es su única fuente de sustento económico, una de ellas es madre reciente con una bebé recién nacida y la otra es una adulta mayor de 63 años que no cuenta con pensión ni otra fuente de ingresos. De perder su espacio de trabajo, la afectación sería inmediata, grave, urgente e impostergable. Por tanto, la medida provisional es indispensable para evitar un daño cierto, actual y de consecuencias irreversibles, mientras el juez constitucional adopta una decisión de fondo.

II. HECHOS

PRIMERO. Las accionantes NUBIA ESPERANZA CORREDOR LAITON y SILVIA ROSA ORTIZ MARTINEZ son trabajadoras informales dedicadas a la venta de ropa en el espacio público ubicado en Carrera 6 #20a-41 sur, Bogotá, barrio 20 de julio, donde han desarrollado su actividad económica de manera pacífica, continua e ininterrumpida

por más de diez (10) años, constituyendo este espacio su fuente principal y única de ingreso económico.

SEGUNDO. La señora NUBIA ESPERANZA CORREDOR LAITON es madre cabeza de familia y se encuentra en periodo de recuperación postparto, tras dar a luz el día 29 de noviembre de 2025. Su bebé es una menor de edad con protección reforzada constitucional, por lo que el sustento diario (servicios, alimentación, arriendo, entre otros) proviene de la actividad económica informal es indispensable para su mínimo vital y el de su bebe recién nacida.

TERCERO. Además, la accionante está clasificada en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBÉN IV, Grupo A – Pobreza Extrema, subgrupo A3, lo cual evidencia una situación de alta vulnerabilidad socioeconómica:

Registro válido	
Fecha de consulta:	11/12/2025
Ficha:	11001110986000000268

A3
GRUPO SISBÉN IV
Pobreza extrema

DATOS PERSONALES	
Nombres:	NUBIA ESPERANZA
Apellidos:	CORREDOR LAITON
Tipo de documento:	Cédula de ciudadanía
Número de documento:	1018415171
Municipio:	Bogotá
Departamento:	Bogotá

CUARTO. La señora Silvia Rosa Ortiz Martínez es una adulta mayor de 63 años, vendedora informal en el mismo sector, quien no cuenta con pensión ni con ninguna otra fuente de ingresos. Su única forma de sustento es la actividad comercial que ejerce diariamente en su puesto tradicional de ventas, mediante la cual cubre sus gastos básicos de alimentación, salud y vivienda. Dada su edad y situación económica, se encuentra en una condición de especial protección constitucional, por lo que cualquier afectación a su lugar de trabajo compromete directamente su mínimo vital y su dignidad humana.

QUINTO. Las accionantes se encuentran identificadas y caracterizadas por la Alcaldía Local de San Cristóbal como trabajadoras informales del sector, y cuentan con la asignación y reconocimiento de este espacio de trabajo desde hace más de una década. La propia administración local les otorgó dicho punto para el ejercicio de su actividad comercial, razón por la cual han permanecido allí de manera estable, continua y

pacífica, sin haber sido notificadas de procesos de desalojo, reubicación o modificación de su ubicación tradicional:



SEXTO. En los últimos días, la Alcaldía Local de San Cristóbal, junto con el IDU, el IPES y el contratista CARVEPA S.A.S., iniciaron la instalación de casetas o módulos en el área exacta donde las accionantes han ejercido su actividad comercial por más de 10 años. Estas casetas pretenden ser utilizadas para reubicar a otros vendedores informales, vulnerando los derechos fundamentales de quienes ya se encuentran ubicadas en ese punto, previamente reconocidas, identificadas y caracterizadas por la misma Alcaldía Local como trabajadoras informales del sector.

Dicha intervención se encuentra actualmente en ejecución, tal como se evidencia en las siguientes imágenes que se aportan como prueba:

Caseta en proceso de instalación:



Croquis o plano del área donde se proyecta la instalación de la caseta, señalando el punto del puesto de trabajo de las accionantes:



Esta actuación administrativa sin aviso previo ni proceso de reubicación afecta de manera directa la continuidad de su única fuente de ingresos y desconoce el principio de confianza legítima en materia de espacio público.

SEXTO. Estas obras se están adelantando sin previo aviso, sin socialización, sin consulta con las personas que ocupan legítimamente ese espacio desde hace más de una década y sin ofrecer un proceso claro, formal ni real de reubicación, afectando gravemente su estabilidad laboral y la continuidad de un ingreso mínimo.

SÉPTIMO. Las accionantes han buscado información con funcionarios de la Alcaldía Local sobre su reubicación o alternativas para seguir trabajando, pero no han recibido respuesta concreta, ni se les ha informado si tienen derecho a un puesto o si serán desplazadas sin opción distinta.

OCTAVO. La intervención en el espacio, a través de maquinaria y obras ejecutadas por CARVEPA S.A.S., está reduciendo el espacio donde las accionantes ubicaban

diariamente sus ventas, impidiéndoles desarrollar su actividad económica, lo cual afecta de manera directa e inminente su mínimo vital.

NOVENO. Esta actuación desconoce el principio de confianza legítima, reconocido por la Corte Constitucional para los vendedores informales que ocupan por largo tiempo un espacio público y respecto de quienes la Administración no puede adelantar intervenciones súbitas o lesivas sin una transición adecuada y alternativas reales de ubicación.

DÉCIMO. La situación reviste carácter urgente, pues tanto la adulta mayor como la madre en postparto dependen exclusivamente de su trabajo diario para subsistir. La falta de certeza sobre su reubicación deja a ambas en un escenario de desprotección total, poniendo en riesgo su vida digna y la de la recién nacida, vulnerando su derecho fundamental al trabajo, al mínimo vital

UNDÉCIMO. A la fecha, las entidades accionadas continúan con la instalación de casetas, lo que hace necesaria la intervención inmediata del despacho para evitar un daño consumado, pues cada día sin posibilidad de trabajar representa un impacto severo sobre el sustento básico de las accionantes.

III. MARCO JURÍDICO

La Corte Constitucional ha desarrollado una sólida línea jurisprudencial sobre la protección especial de las personas vendedoras informales y la necesidad de armonizar su derecho al trabajo, el mínimo vital y la confianza legítima con el deber de recuperación y administración del espacio público por parte de las entidades territoriales. Esta jurisprudencia es plenamente aplicable al caso de las accionantes, quienes llevan más de una década ubicadas en el mismo lugar, **cuentan con reconocimiento y caracterización por parte de la Alcaldía Local de San Cristóbal y dependen exclusivamente de esta actividad informal para su subsistencia y la de sus familias.**

En la Sentencia T-102 de 2024, la Corte reiteró que las autoridades no pueden adelantar acciones de intervención o desalojo sin realizar previamente una verificación integral de la situación personal, familiar, económica y social de los vendedores informales afectados. En dicho fallo, se subrayó que, cuando la actividad informal se desarrolla por varios años de manera continua, se genera una expectativa legítima y una relación de confianza que impiden actuaciones abruptas sin ofrecer antes alternativas laborales o de reubicación adecuadas. La Corte concedió el amparo porque los operativos vulneraron el derecho al trabajo, al mínimo vital y a la dignidad humana de una persona que llevaba doce años ejerciendo venta informal y presentaba múltiples condiciones de salud.

La Sentencia T-312 de 2024 reforzó la protección especial hacia las personas adultas mayores que derivan su sustento de actividades informales. En ese caso, la administración destruyó un kiosco sin reubicar ni ofrecer medidas compensatorias, afectando gravemente el sustento de una mujer de 69 años. La Corte ordenó un proceso de concertación y reubicación, destacando que la edad avanzada, la falta de ingresos alternativos y la dependencia total del trabajo informal exigen medidas reforzadas de protección.

La Sentencia T-201 de 2024 profundizó en la armonización entre el deber de restitución del espacio público y la protección del trabajo de vendedores informales. Incluso cuando no hay confianza legítima plenamente configurada, las autoridades deben garantizar una alternativa económica, laboral o de reubicación para asegurar el sustento de las familias afectadas, especialmente cuando se trata de mujeres, madres cabeza de familia y personas con hijos menores a cargo.

La Sentencia T-311 de 2024 añadió un componente importante: el deber de motivación clara, explícita y comprensible de las actuaciones administrativas en procesos policivos relacionados con espacio público. **La Corte enfatizó que las órdenes que afectan casetas o puestos de vendedores deben estar debidamente motivadas, comunicadas en lenguaje claro y no pueden imponer cargas sorpresivas o ambiguas que pongan en riesgo el sustento del vendedor.** La Corte concedió la tutela porque la administración interpretó de manera imprecisa y perjudicial una orden policiva, afectando directamente la actividad económica de un vendedor que llevaba 24 años en el mismo sitio.

La Sentencia T-722 de 2006 es un precedente en materia de vendedores informales. La Corte determinó que es inconstitucional realizar operativos de restitución del espacio público sin debido proceso, sin notificación previa, sin orden del alcalde competente y sin ofrecer alternativas de reubicación, especialmente cuando los comerciantes cuentan con permisos o reconocimiento previo. El fallo reiteró que las políticas de recuperación del espacio público deben consultar la realidad social del lugar y prever alternativas reales de reubicación; de lo contrario, se vulneran los derechos al trabajo, al debido proceso y a la confianza legítima.

En la Sentencia T-257 de 2017, la Corte concedió la tutela para suspender un proceso de restitución del espacio público hasta que las autoridades ofrecieran políticas, programas y medidas que mitigaran el impacto sobre los vendedores afectados. La Corte reiteró que el derecho al trabajo no puede sacrificarse de manera automática frente a la protección del espacio público, pues se requiere un análisis cuidadoso de la realidad social y económica de quienes dependen exclusivamente de su actividad informal para subsistir.

Finalmente, la reciente Sentencia T-065 de 2025 reafirmó la obligación de reubicar en condiciones dignas y equitativas a vendedores informales en procesos de recuperación del espacio público, especialmente cuando se trata de mujeres cuyo sustento depende exclusivamente de su actividad comercial. El fallo destacó la importancia del enfoque de género, la autonomía económica de las mujeres. **La Corte ordenó reubicarla en igualdad de condiciones frente a los demás vendedores reubicados.**

Esta línea jurisprudencial demuestra que, antes de intervenir el espacio donde los vendedores informales han desarrollado su actividad por años, la administración debe cumplir con obligaciones estrictas: verificar su situación individual, social y económica; notificar y motivar adecuadamente las decisiones; actuar con respeto por la confianza legítima adquirida; concertar alternativas reales de reubicación; y adoptar medidas diferenciales cuando se trate de mujeres, madres cabeza de familia o personas adultas mayores.

En el caso presente, la instalación de casetas por parte de la Alcaldía Local de San Cristóbal, el IDU, el IPES y el contratista CARVEPA S.A.S. en el mismo lugar donde las accionantes trabajan desde hace más de diez años; sin consulta, sin reubicación y para favorecer a terceros, constituye una violación directa de esta jurisprudencia consolidada y pone en riesgo inmediato su subsistencia, el mínimo vital de una madre cabeza de hogar, una bebé recién nacida y una mujer adulta mayor de 63 años cuyo único sustento proviene de esta actividad comercial.

IV. LEGITIMACIÓN POR ACTIVA

Según lo establecido en el Artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial preferente y sumario al que puede acudir cualquier persona cuando sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los casos previstos por el Legislador, siempre que no exista otro mecanismo judicial idóneo para su protección efectiva.

El Artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que:

“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos (...)”.

En el presente caso, las accionantes, ambas trabajadoras informales reconocidas y caracterizadas por la Alcaldía Local de San Cristóbal, acuden a esta acción para solicitar la protección de su derecho al mínimo vital, al trabajo, de su bebé recién nacida y de

una adulta mayor en estado de vulnerabilidad, así como la protección del principio de confianza legítima.

Las peticionarias se encuentran plenamente legitimadas para actuar, en tanto alegan afectación directa e inmediata de sus derechos fundamentales por actuaciones de las entidades demandadas.

V. LEGITIMACIÓN POR PASIVA

Según los Artículos 5, 13 y 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede frente a acciones u omisiones atribuibles a autoridades públicas o particulares en los casos señalados por la ley, cuando estas conductas vulneran derechos fundamentales.

En este caso, se encuentran legitimados como partes pasivas:

La Alcaldía Mayor de Bogotá D C, cabeza del sector administrativo Distrital, y como tal, tiene responsabilidad sobre las políticas públicas y decisiones relacionadas con el espacio público, la movilidad, la gestión del territorio, **la coordinación de las Alcaldías Locales.**

La Alcaldía Local de San Cristóbal, autoridad directamente encargada de las intervenciones de la localidad de San Cristóbal.

El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, entidad que participa en la intervención física del espacio.

El Instituto para la Economía Social – IPES, responsable de procesos de caracterización y acompañamiento a vendedores informales.

El contratista CARVEPA S.A.S., encargado de la ejecución de las obras de instalación de casetas, cuya actuación material contribuye a la vulneración alegada.

Por tanto, todas estas entidades son autoridades con función pública frente a quienes es procedente dirigir la presente acción.

VI. SUBSIDIARIEDAD

La jurisprudencia constitucional ha reiterado que la acción de tutela no sustituye los mecanismos ordinarios, salvo cuando estos no resultan idóneos o eficaces, o cuando existe riesgo de un perjuicio irremediable.

La Corte ha establecido que la tutela; es improcedente si existen otros mecanismos judiciales idóneos. Procede de manera transitoria cuando existen mecanismos ordinarios, pero se requiere evitar un perjuicio irremediable. Procede de manera definitiva cuando no existen otros mecanismos eficaces.

En los casos de recuperación de espacio público, la Corte ha señalado reiteradamente que, cuando la intervención afecta el sustento de familias vulnerables, debe evaluarse la tutela por el riesgo de un daño inminente y grave, especialmente cuando involucra menores de edad, madres cabeza de hogar y adultos mayores.

En este caso, se cumple con el requisito de subsidiariedad toda vez que, las obras ya se están ejecutando. **No hubo proceso de reubicación. Las accionantes dependen exclusivamente de este espacio para su sustento. Una de ellas es madre reciente con una bebé recién nacida. La otra es una adulta mayor cuya única fuente de ingreso es el puesto que ocupa desde hace más de una década.**

Existe un perjuicio irremediable porque el daño es real, inminente, grave y requiere medidas impostergables, pues la instalación de casetas implica el desplazamiento de su lugar de trabajo y la pérdida inmediata de su única fuente de ingresos. En consecuencia, se cumple el requisito de subsidiariedad.

VII. INMEDIATEZ

La acción de tutela debe presentarse dentro de un plazo razonable desde la amenaza o vulneración alegada, con el fin de garantizar eficacia, actualidad y seguridad jurídica.

En este caso, la tutela se interpone de manera inmediata, puesto que las obras de instalación de casetas comenzaron recientemente y continúan en ejecución, lo que pone en riesgo de forma directa y urgente los derechos fundamentales de las accionantes.

La presentación de la acción ocurre dentro de un término razonable y proporcional a la inminencia del daño, por lo que este requisito se encuentra satisfecho.

VI. PETICIONES

Respetuosamente solicito al despacho:

Primero. Amparar los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso administrativo, a la confianza legítima y al derecho a la igualdad de las accionantes NUBIA ESPERANZA CORREDOR LAITON CC 1018415171 y SILVIA ROSA ORTIZ MARTINEZ CC 20441454, quienes ejercen actividades económicas como vendedoras informales y se encuentran plenamente identificadas y caracterizadas por la alcaldía local de San Cristóbal, entidad que les asignó el espacio que han ocupado por más de una década.

Segundo. Ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, Alcaldía Local de San Cristóbal, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, Instituto para la Economía Social – IPES y CARVEPA S.A.S. (Contratista ejecutor de la obra), suspender cualquier actuación orientada al retiro, desalojo, desmonte o restitución del espacio donde históricamente

han ejercido su actividad económica, hasta tanto se surta un debido proceso real y efectivo, respetando los parámetros fijados por la Corte Constitucional, especialmente en lo referente a la motivación clara de los actos administrativos, el deber de notificación personal, el principio de confianza legítima y la obligación de alternativas económicas reales para los vendedores informales.

Tercero. Ordenar a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, Alcaldía Local de San Cristóbal, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, Instituto para la Economía Social – IPES y CARVEPA S.A.S. (Contratista ejecutor de la obra), garantizar a las accionantes una alternativa económica o reubicación adecuada, proporcional y efectiva, que tenga en cuenta su condición de mujeres trabajadoras informales de larga trayectoria en el territorio, conforme a los estándares jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional.

Cuarto. Adoptar como medida provisional, de manera inmediata, la suspensión de cualquier instalación, construcción o adecuación de casetas en el lugar ubicado en la Carrera 6 #20A-41 Sur, barrio 20 de Julio, Bogotá, para evitar un perjuicio irremediable consistente en la pérdida abrupta del único medio de subsistencia de las accionantes.

Quinto. Ordenar que, mientras se resuelve de fondo esta acción, se garantice la permanencia de las accionantes en el lugar donde ejercen su actividad económica, evitando actos de perturbación, presión, hostigamiento, desalojo o desplazamiento por parte de cualquier autoridad o contratista.

Sexto. Las demás órdenes que el despacho considere necesarias para la protección integral de los derechos fundamentales vulnerados.

VII. NOTIFICACIONES

Para efectos de notificación, señalo:

ACCIONANTES:

NUBIA ESPERANZA CORREDOR LAITON CC 1018415171

Teléfono: 3118909604 Correo electrónico: natys.pacha@gmail.com

SILVIA ROSA ORTIZ MARTINEZ CC 20441454

Teléfono: 3202027006 Correo electrónico: silvia1962om@gmail.com

ACCIONADAS:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

Cra 8 N° 10-65 Bogotá D.C Tel: (601) 381-3000 Correo:
notificacionesjudiciales@secretariadecolombia.gov.co

Avenida Primero De Mayo N° 1 - 40 SUR Barrio Velódromo Teléfono: (601) 208 14 43
- (601) 362 04 03 - (601) 382 04 50/80 Ext. 7821 - 7822 -7823 Correo:
notificacionesjudiciales@sancristobal.gov.co

IPES – INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

Dirección: Carrera 9 # 10 - 59 Bogotá, D.C. Teléfono: 01 8000 517 621- 601 484 19 30
Correo: sjuridicac@ipes.gov.co

CARVEPA S.A.S.

AVENIDA 0 19 71 LC 101 BRR CAOBS, CUCUTA, Norte de Santander, Teléfono: 57
316 8104468

Cordialmente,

NUBIA ESPERANZA CORREDOR LAITON
CC 1018415171

Espera Celi.

CC 1018415171

SILVIA ROSA ORTIZ MARTINEZ
CC 20441454

Silvia Ortiz
20.441.454
de Caguaz (Cund.)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.415.171
CORREDOR LAITON

APELLIDOS

NUBIA ESPERANZA

NOMBRES



Firma
Nubia

FIRMA



CERTIFICADO DE NACIDO VIVO ANTECEDENTE PARA EL REGISTRO CIVIL



NÚMERO DEL CERTIFICADO DE NACIDO VIVO

25114910407919

La información consignada en este certificado, se encuentra protegida por el Servicio
Nacional de Datos de la Constitución Política Nacional y amparada en la
Ley 1581 de 2012. Por lo tanto no se debe ceder en cumplimiento de la garantía de
vida privada y para los fines estrictamente autorizados.

I. INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR DEL NACIMIENTO País	Departamento	Municipio	
COLOMBIA	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	
LUGAR DEL NACIMIENTO Ciudad	Centro Poblado (Inspección, comisariato o caserio)		
Cabecera Municipal			
FECHA DEL NACIMIENTO Año - Mes - Día	HORA DEL NACIMIENTO Hora - Minutos		
2025-11-29	20:59:00		
SEXO DEL NACIDO VIVO	HEMOCLASIFICACIÓN DEL NACIDO VIVO Grupo sanguíneo	Factor RH	
Femenino	O	Positivo	
IDENTIFICACIÓN DE LA MADRE Tipo de documento		Número de documento	
Cédula de ciudadanía		1018415171	
APELLIDOS Y NOMBRE(S) DE LA MADRE (TAL COMO FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD)			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
CORREDOR	LAITON	NUBIA	ESPERANZA
DE ACUERDO CON LA CULTURA, PUEBLOS O RASOS FÍSICOS, EL NACIDO VIVO ES RECONOCIDO POR SUS PADRES COMO		¿A cuál pueblo indígena pertenece?	
Pertenencia étnica		Ninguno de los anteriores	

II. DATOS DE QUIEN CERTIFICA EL NACIDO VIVO

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADOR Tipo de documento		Número de documento			
Cédula de ciudadanía		1052384270			
APELLIDOS Y NOMBRE(S) DEL CERTIFICADOR		Primer nombre		Segundo nombre	
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre		
GONZALEZ	GRANADOS	DAVID	ENRIQUE		
PROFESIÓN DE QUIEN CERTIFICA EL NACIMIENTO		REGISTRO PROFESIONAL			
Médico		1615-14			
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO Departamento		Municipio			
BOGOTÁ, D.C.		BOGOTÁ, D.C.			
FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO Año - Mes - Día		FIRMA DE QUIEN CERTIFICA EL NACIMIENTO			
2025-11-29					

REGISTRO ÚNICO DE AFILIADOS - nacimientos y defunciones
Fecha de impresión: 2025-11-28 10:18

Código verificación: 7BF4-924D-9641-6B54

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **20.441.454**

ORTIZ MARTINEZ

APELLIDOS
SILVIA ROSA

NOMBRES

Silvia Ortiz
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **09-OCT-1962**

CAQUEZA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **B+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

27-MAY-1981 CAQUEZA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHE

ÍNDICE DERECHO



A-1500150-00849349-F-0020441454-20160916 0051192301A 1 7724010495